

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE GESTIÓN N° 54 /14.

Apellido y NOMBRE	Legajo	D.N.I	Jerarquía
MANETTI, Carlos Roberto	81068	23602874	Comisario Inspector
SANTANA, Juan Cruz	81413	25640825	Sub Oficial Escribiente



MANETTI, Carlos Roberto  
Comisario Inspector

SANTANA, Juan Cruz  
Sub Oficial Escribiente

ANEXO I  
RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE GESTIÓN N° 72 /14.

BENEFICIARIO	COMPROBANTE N°	IMPORTE
DANIEL HORACIO STEINBEISSER	Fact. B 0001-00001871	\$ 900,00
MARIANO GAUDIO	Fact. B 0001-00006281	\$ 15.716,00
MARÍA JOSÉ CALDERÓN	Fact. B 0002-00003243	\$ 10.500,00
CECILIA INÉS PALERMO	Fact. B 0001-00002833	\$ 6.400,00
A. TAMBORINI - B. LIZALDE	Fact. B 0001-00004122	\$ 6.416,00
Total Erogado		\$ 39.392,00
Depósito BTF N° 2539 - CUT		\$ 10.068,00
TOTAL GENERAL		\$ 50.000,00



NATALIA E. QUINTANA  
Jefe Departamento Inscripciones-Asociaciones Civiles  
Poder Ejecutivo Provincial  
Sec. Gen. Gub.

MANETTI, Carlos Roberto  
Comisario Inspector

ANEXO II  
RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE GESTIÓN N° 72 /14.

U.G.G.	INCISO	IMPORTE
8531	391	\$ 33.532,00
8531	399	\$ 6.400,00
SUBTOTAL		\$ 39.932,00
Depósito BTF N° 2539 - CUT		\$ 10.068,00
TOTAL GENERAL		\$ 50.000,00



MANETTI, Carlos Roberto  
Comisario Inspector

SANTANA, Juan Cruz  
Sub Oficial Escribiente

Cde. Expte N° 1057/1987  
"CENTRO DE JUBILAOS, RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTIARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR AKAINIK"

Ushuaia, 2 de diciembre de 2014.-

Vienen las actuaciones del correspondiente, a esta área Legal, en razón de la documentación presentada por la Asociación de mención en virtud de lo indicado por la titular de la Jefatura Departamento Inscripciones-Asociaciones Civiles mediante Informe N° 302/12, correspondiendo efectuar el control de legalidad, verificándose el incumplimiento de determinados requisitos formales y sustanciales exigidos por la norma de aplicación.

A) ANTECEDENTES

A fs. 3036/3045 obra nuevo estatuto social y reglamento interno, cuyas modificaciones se inscribe mediante Disposición I.G.J. N° 029/2013 en el libro de Registro de estatutos de Estatutos de Asociaciones Civiles y Fundaciones Tomo N° 1, bajo el N° 327, Folio 164, Año 2013, el cual fue aprobado mediante Acta de Asamblea de fecha 20 de diciembre de 2012 obrante a fs. 2244/2245.

Conforme a ello, la entidad tiene como objeto social A) Agrupar a sus afiliados institucionalmente a fin de encausar sus requerimientos e inquietudes en forma orgánica. B) Velar por los intereses del conjunto en defensa de los derechos adquiridos normados por las disposiciones legales vigentes. C) Atender los requerimientos personales de sus afiliados cuando este formalizado reglamentariamente. D) Instrumentar acciones de carácter social, cultural, educacional, deportivo o vacacional de las que sus afiliados y grupo familiar sean protagonistas. E) Mantener la relación institucional con los poderes públicos, asociaciones de carácter previsional y gremial como así también con la actividad

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

privada. f) Realizar estudios previsionales y aconsejar a las autoridades competentes sobre la materia, a fin de la preservación y garantía del régimen. g) Brindar asesoramiento a los asociados. h) Fomentar la unión entre los socios. i) Elevar la credibilidad del Centro y de los actos enarado por el mismo, a través de su Comisión Directiva. j) Difundir su accionar en las gestiones y acciones realizadas.

Y conforme el artículo 4 del estatuto, su patrimonio se compone del capital inicial de las cuotas sociales, de los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así como de las rentas que las mismas produzcan, de las donaciones, herencias, legados y subvenciones que se le acuerden; del producido de beneficios, festividades y todo otro ingreso lícito.

Ahora bien, del análisis de la documentación contable, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2013, mediante Informe N° 260/2014 Letra. Cuerpo de Inspectores I.G.J., (fs. 2327) se advierte en el punto 1, de la Nota 2.3. Créditos por servicios "préstamos otorgados" que la entidad otorga préstamos personales, situación que amerita solicitar a la entidad brindar mayor información y la metodología empleada para su otorgamiento y cancelación. Asimismo en el punto 2 del informe se advierte del Cuadro II Recursos Ordinarios "Ingresos por comisiones" por la suma de \$ 46.057,25 y por último del punto 3 se advierte de la Nota 2.6 Deudas Comerciales que "dichas deudas se originaron en los descuentos efectuados en los haberes de los afiliados del Centro de jubilados, para que este le pague a los distintos entes con conforme los convenios firmados", situación que requiere brindar mayor información a la entidad, a fin de verificar el real cumplimiento del objeto social.

Luego, mediante Informe N° 200/2014 letra: D.I.A.C.I.G.J., de fecha 16 de junio de 2014, Letra D.I.A.C.I.G.J., se realizan distintas observaciones a la documentación acompañada respecto al acto asambleario realizado el día 15 de mayo de 2014, notificándose de dicha providencia y del informe N° 260/14 el día 15 de julio de 2013, a la Srta. Judith Peralta, en su carácter de tesorera.

2

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

Por último del Informe N° 302/14 letra: D.I.A.C.I.G.J., se advierte que la entidad no ha dado cumplimiento a las distintas observaciones, respecto al acto asambleario realizado el 15 de mayo del presente año, adeudando la firma de la presidente a fs. 2484/2499 y lo estipulado en el artículo 368 de la Disposición I.G.J. n° 60/07.

#### B.- ANALISIS JURIDICO

La Ley Provincial N° 798 que crea en el ámbito de la Provincia la Inspección General de Justicia, otorgándole las funciones y facultades, entre ellas la de fiscalizar, debiendo así dejar constancia que ese control tiende a garantizar en una primera instancia la incidencia del Bien común en el objeto de una determinada asociación a fin de otorgarle con la autorización para funcionar una "calidad social" que se traduce en el reconocimiento estatal frente a toda la sociedad, a fin de que esa entidad lleve a cabo un objeto social de interés estatal.

Ahora bien, una vez que se autoriza a funcionar, la Inspección General de Justicia, debe controlar el cumplimiento de los requisitos estatutarios con la finalidad que la persona jurídica autorizada a funcionar, no desvirtue su objeto social (art. 8 inc c) del Decreto Reglamentario N° 2991/09), interviniendo cuando se advierte un incumplimiento de las normas estatutarias o legales vigentes, o de su objeto social.

Cabe recordar entonces que toda asociación se caracteriza por ser no lucrativa, es decir conforme lo sostiene el Dr. Cahian en su libro, "Las asociaciones civiles en la República Argentina", persiguen un fin ideal, distinto, diferente del interés particular, individual de cada uno de sus socios siguiendo este pensamiento, la finalidad de la asociación sería algo igual al interés de la comunidad, al interés público. Entonces, si la finalidad de la corporación es de interés general, esa finalidad es de bien común y su fin es el bien común, entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, es

4

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

Posteriormente, la entidad en fecha 11 de agosto (fs. 2534) la entidad presenta el descargo pertinente, manifestando respecto al préstamo que las mismas son ayudas económicas a su vez en relación al punto 2 del informe contable citado refiere que son "comisiones que abonan las entidades bancarias por tramites que realiza el Centro de Jubilados en otorgamiento de préstamos", a tal fin acompaña el Acta Convenio de fecha 28 de junio de 2010, suscripto entre el Centro y la Firma V.E.M.C. S.R.L., mediante la cual se acuerda que el Centro emitirá una orden de compra a favor del comercio, debiendo el centro conforme la cláusula tercera descontar de los haberes previa conformidad del mismo. A su vez, se advierte en la cláusula decima que en concepto de retribución por la gestión, se abona al centro el 3% de la compra de cada asociado.

Igual situación se advierte del Convenio obrante a fs. 2546/2547, suscripto en fecha 15 de diciembre de 2010, entre el Centro y el Comercio "El Aguila P", mediante la cual ante las compras efectuadas en el comercio, el centro se compromete a efectuar los descuentos correspondientes, recibiendo el centro una bonificación del 6% del total de la facturación a percibir.

A su vez acompaña el convenio de asistencia financiera de fecha 19 de julio de 2004, suscripto entre el Centro y El Banco del Sol S.A., el cual en la cláusula primera se advierte que el Banco brindaría una asistencia financiera a los agentes de la Administración pública, debiendo abonar a el Centro, conforme la cláusula 13 una comisión de cada crédito.

Atento al informe N° 390/2014 letra. Cuerpo de Inspectores, se advierte del descargo acompañado entonces, que "los ingresos por Comisiones" es percibido en concepto por el uso del código de descuento que la entidad realiza a entidades financieras y comerciales. Asimismo y respecto al apartado "Deudas Comerciales" la entidad manifiesta que el centro a suscripto distintos convenios "por los cuales el afiliado compra y el Centro paga al comercio y luego efectúa el descuento al afiliado de sus haberes.

3

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

decir un público general extendido a toda la sociedad en su conjunto", por ello el Estado autoriza su funcionamiento como persona jurídica.

Ahora bien, adentrándonos en la cuestión particular y tal como ha sido analizado en las actuaciones "Fundación Malvinas S/ Personería Jurídica" Expte. N°1653/2006 mediante Dictamen C.I.(área legal) N° 05/14 y en las actuaciones "Asociación Civil Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia S/ Personería Jurídica" Expte. N° 10672/1988 mediante Dictamen C.I. (área legal) N° 06/14 a los cuales me remito y siguiendo dichos lineamientos expongo que el carácter altruista de una Asociación, no solo se define por las actividades que puede alcanzar sino también por la exclusión de aquellas que le son ajenas por imperio normativo.

En una asociación, su denominación permite identificarla y diferenciarla de otras constituyendo un atributo de su personalidad reuniendo las siguientes cualidades: inconfundibilidad, identificación y veracidad, quedándose con este último concepto ya que ello, relacionado al objeto que debe ser preciso y determinado, deben evitar que induzcan a error sobre la verdadera actividad de la entidad.

Dichos conceptos, resultan importantes señalarlos dado a las acciones llevadas a cabo por la entidad, en relación a la cesión del código de descuento a la entidad crediticia y/o comercial, conforme los antecedentes tenidos a la vista, para la comunidad toda que trata con aquellas entidades y luego ve que el descuento de sus haberes lo efectúa la Asociación, situación que conlleva a un estado de confusión y escasa veracidad sobre los objetivos que esta se encuentra autorizada a cumplir.

Cabe aclarar que los objetivos de una Asociación Civil sin fin de lucro deben ser precisos y determinados, a fin de conocerse con exactitud las actividades y vinculaciones comerciales que rijan la vida de la entidad a fin de lograr sus objetivos.

Ahora bien, para cumplir este objetivo la Asociación puede buscar un financiamiento, el cual no puede surgir de un hecho ilegal o contrario a normativas

5

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

vigentes ni ser la base de una actitud engañosa que puede dar lugar a un fraude o beneficio por encima de un simple particular.

De allí que, siguiendo los lineamientos establecidos y analizados en las actuaciones mencionadas, resulta necesario traer a colación lo expuesto por la entidad bancaria respecto al uso del código de descuento otorgado a las entidades sin fines de lucro.

En este orden, se libro en las actuaciones mencionadas, el oficio N° 527/13 al Banco Tierra del Fuego, cuya copia certificada obra en las presentes actuaciones, a fin de que informe si las entidades pueden ceder su código de descuento a Sociedades Comerciales y/o mutuales. En respuesta a ello, el Banco Mediante nota G.A.L.O. N° 93/2013 manifiesta que no es posible ceder el código de descuento, toda vez que los mismos son imputados exclusivamente a las prestaciones que brindan las entidades.

A ello le agrego que, conforme surge de lo informado por el Banco, el Régimen establecido en el Decreto Provincial N° 828/04 y la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 177/04, establece un régimen de Deducción de Haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero, encontrándose incluídas las entidades privadas comerciales y de servicios.

Por su parte, la resolución citada establece en forma categórica que el código de descuento será imputado exclusivamente a las prestaciones que la entidades brinden, siendo palmaria la extralimitación de la entidad, quien viene cediendo el Código de Descuento a una empresa crediticia y comercial, a cambio de la percepción de un ingreso acordado de un porcentaje de lo descontado, porcentaje que debiera analizarse si debe tributar por estar excedido de los ingresos exentos del pago a los Ingresos Brutos (Art. 120 inciso L y J de la Ley 439) y en su caso si ello se venía abonando.

Frente a ello, es necesario resaltar diferentes puntos que objetan esta operatoria y que no puede el Estado permanecer indiferente, siendo el objeto de la existencia de la Inspección General de Justicia la fiscalización de las Asociaciones y la

6

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

con dicha entidad crediticia y con todas las entidades que tienen convenio con el mismo fin

Asimismo resulta necesario dar intervención a las entidades recaudadoras (A.F.L.P. y RENTAS de la PROVINCIA) a fin de determinar la posible existencia de contribuciones tributarias evadidas.

La existencia del Código de Descuentos, como régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública debe necesariamente proteger que los ingresos remuneratorios no se vean afectados por descuentos excesivos.

Aquí está involucrada toda una función del estado de garantizar el acceso al crédito como beneficio y no como perjuicio. De allí que las normas que establezcan el Código de Descuento debe prever esta situación que se ensambla con los derechos del consumidor que propician que deba garantizarse el derecho a ser informado de manera cierta, objetiva, veraz, detallada de modo eficaz y eficiente sobre las características esenciales del crédito, de cada operatoria que le permita luego un ejercicio pleno de sus derechos y contar con herramientas y capacidad necesaria para evitar cualquier distorsión en el propósito del servicio, sea que el daño y el aprovechamiento de las necesidades provengan de errores, fallas del sistema o de su utilización fraudulenta.

De allí que, si el Banco no otorga y sin perjuicio de su normativa, código de descuentos a entidades crediticias y/o comerciales, nada tenía que facilitar una Asociación civil sin fin de lucro, toda vez que no resulta su temática.

Por otra parte, y en relación al acto asambleario de fecha 15 de mayo de 2014, se advierte que la entidad si bien no ha dado cumplimiento a los artículos 364 y 365 de la Disposición I.G.J. N° 60/07, la finalidad de la convocatoria ha sido cumplida y a fin de no caer en el excesivo rigor formal, se aconseja excepcionar por única vez, debiendo la entidad en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a los artículos 364, 365 y 368 de la Disposición I.G.J. N° 60/07.

8

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

normalización de ellas, cuando las actuaciones de sus administradores no sean congruentes con las disposiciones legales que rigen la vida de la institución.

Cualquier evidencia de incursión en la intermediación financiera conlleva a una investigación, pudiendo cancelarse la matrícula mediante el retiro de la autorización para funcionar, dado que es deber de la jurisdicción local verificar adecuadamente la finalidad de la Asociación. De allí que, siendo un requisito básico la inexistencia de lucro, la operatoria en la cual se encuentra inmersa, en esta ocasión permite vincularla con préstamos de dinero, actividad que debieran realizar las entidades crediticias autorizadas a ese efecto y que en nada se entrelaza su objeto con el que debe tener este tipo de entidad.

Ahora bien siendo un requisito básico la inexistencia de lucro, los conceptos de préstamo de dinero, tasas, lucro, nada tienen que ver con este tipo de entidad, pudiéndose ver la Asociación bajo la apariencia de otorgar o encubrir una actividad financiera sostenida en el lucro comercial, a lo que le sumo que por su actividad podría encontrarse evadiendo impuestos, lo que motiva la reacción de los órganos del estado a fin de investigar ello y cobrar los impuestos que por esa actividad quedan superados de los límites de la exención, situación que presumo alcanzada por la percepción del % del acuerdo existente con el Banco, en virtud de la cesión del código de descuento y que el órgano de recaudación impositiva deberá analizar.

Téngase en cuenta aquí que, toda norma de excepción impositiva posee requisitos necesarios y concurrentes entre los cuales se encuentra que los ingresos deben estar relacionados en forma directa con los fines específicos del ente, situación que aquí se extralimitaria como lo es la percepción de un porcentaje con la cesión del código de descuento. Ello es aquí netamente un acuerdo comercial, fuera de toda relación con los fines de la entidad. Igual situación se advierte de los convenios celebrados entre el centro con el proveedor "el águila" y la firma V.E.M.C. S.R.L.

De allí que entiendo aconsejable iniciar un proceso de fiscalización a los fines de ordenar el inmediato cese de la utilización de la cesión del código de descuento

7

MINISTERIO DE GOBIERNO,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD  
Inspección General de Justicia

Aquí destaco que la normativa vigente y el estatuto obviamente debe respetarse y el actuar de la comisión directiva no debiera alterar las bases generales allí pactadas, pues de otro modo resultaría ilusoria la garantía dada por las normas estatutarias. Pero lo cierto es que ello, no posee un carácter absoluto, pudiendo admitirse excepciones por motivos racionales.

Por último, la presidenta de la entidad, deberá apersonarse a fin de firmar las fs. 2484/2499 del estado contable.

#### C-CONCLUSION

Por todo ello, es que amerita la procedencia de ordenar a la entidad a cesar en forma urgente a la utilización de los convenios aquí analizados mediante la utilización de la cesión del código de descuento y todo otro que pudiere estar vigente por el cual ceda la utilización del código de descuento, percibiendo en el mismo descuentos de haberes que no se corresponden y excedan con los objetivos institucionales de la entidad, ello sin perjuicio de establecer medidas conducentes a los fines de deslindar responsabilidad, ordenando la inmediata modificación del estatuto social, sin perjuicio de entender necesario remitir copias de las actuaciones a la Dirección General de Rentas a fin de iniciar un proceso de investigación en el marco de sus competencias sobre la posible defraudación al estado y pago de los ingresos brutos conforme los alcances de la ley 439 art. 120, así como también a la A.F.L.P., para tomar conocimiento de la situación aquí planteada.

Por último y en relación al acto asambleario de fecha 15 de mayo de 2014, se advierte que la entidad si bien no ha dado cumplimiento a los artículos 364 y 365 de la Disposición I.G.J. N° 60/07, la finalidad de la convocatoria ha sido cumplida y a fin de no caer en el excesivo rigor formal, se aconseja excepcionar por única vez, debiendo la entidad en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a los artículos 364, 365 y 368 de la Disposición I.G.J. N° 60/07.

Dietamen C.I. (Área legal) N° 031/14.

  
María José

9